Mesa Redonda: Buenas prácticas para la inclusión de las personas refugiadas en la educación

Informe y conclusiones finales



© ACNUR/Charity Nzomo

UNHCR ACNUR
La Agencia de la ONU para los Refugiados
comité español
delegación c. valenciana

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. COMPOSICIÓN DE LA MESA REDONDA Y PONENTES 4
3. PANEL 1: PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 4
4. PANEL 2: ORGANIZACIONES SOCIALES 6
5. CONCLUSIONES GENERALES 8

1. INTRODUCCIÓN

El panorama global del desplazamiento forzado presenta dimensiones críticas y complejas. Al cierre de 2025, se contabilizaban 117,8 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo a causa de conflictos armados, violencia generalizada y graves violaciones de los derechos humanos; una cifra que revela que una de cada 70 personas se ha visto obligada a abandonar su hogar. De este total, 41,6 millones son personas refugiadas, incluyendo a 5,4 millones que cruzaron una frontera internacional por primera vez en busca de protección.

Este escenario se ve agravado por la aparición de nuevos conflictos y focos de violencia, dando lugar a dinámicas de desplazamiento prolongado que afectan al 70% de la población refugiada. El impacto socioeconómico de esta crisis recae mayoritariamente en los países de renta baja y media, los cuales albergan al 68% de las personas desplazadas a pesar de no contar con estructuras institucionales lo suficientemente fuertes y estables para su atención.

Dentro de este balance, destaca la extrema vulnerabilidad de la infancia, ya que los niños y niñas representan el 38% de la población desplazada global, sufriendo un impacto directo y devastador en su derecho a la educación. Por el contrario, el año 2025 también registró avances significativos: más de 14,7 millones de personas lograron regresar a sus hogares, entre ellas 4,4 millones de personas refugiadas y 67,8 millones de desplazados internos, mientras que 46,000 personas apátridas adquirieron una nacionalidad, logrando con ello el restablecimiento pleno del acceso derechos bajo el mandato de protección de ACNUR.

Más allá de la magnitud de los datos estadísticos, resulta imperativo recordar que detrás de cada una de estas cifras se hay una historia, una persona que se ha visto obligada a dejarlo todo, pero que conserva intactos sus sueños, su dignidad y la esperanza de reconstruir su vida. Bajo esta premisa se articula la labor que ACNUR desarrolla de manera continuada en articulación con gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

En el ámbito local, el Comité Español de ACNUR, a través de su área de Incidencia y Educación para la Ciudadanía Global, trabaja activamente en la construcción de sociedades de acogida que sean verdaderamente inclusivas y estén libres de los discursos de odio, la xenofobia y las actitudes discriminatorias o violentas que, lamentablemente se expanden en nuestras comunidades.

Es en este marco de corresponsabilidad social donde se sitúa la presente mesa redonda, cuyo objetivo principal es compartir y poner en valor las diversas iniciativas que se articulan desde administraciones públicas, entidades sociales e instituciones

educativas en la C. Valenciana para facilitar la inclusión de las personas forzadas a huir. En esta ocasión, el encuentro busca poner el foco de manera prioritaria en la inclusión dentro de los espacios educativos, partiendo del firme convencimiento de que la educación desempeña un papel fundamental y transformador en la conformación de la identidad ciudadana y en la construcción de la mirada con la que observamos y habitamos el mundo.

2. COMPOSICIÓN DE LA MESA REDONDA Y PONENTES

Para abordar la inclusión desde una perspectiva integral y multi-actor, el encuentro se estructuró en dos mesas de debate complementarias que permitieron compartir las buenas prácticas en torno a la inclusión de las personas refugiadas en la educación.

2.1. Panel 1: Perspectiva Institucional

- Pedro Carceller Icardo, Director General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana.
- María de Zabala Hartwig, Responsable de Soluciones Duraderas de la Oficina del ACNUR en España.
- Ana Sales Ten, Profesora Titular de la Universitat de València a la que representa en el grupo de trabajo de Refugio de la CRUE.
- Vicent Gozálvez Pérez, Profesor Titular de la Universitat de València. Codirector de la cátedra UNESCO-UV Educación Global en el Mediterráneo (EGM).

2.2. Panel 2: Organizaciones Sociales

- Leonora Castaño Cano, Defensora de DDHH en Colombia. Refugiada política en España. Coordinadora de la Colectiva de Mujeres Exiliadas, Refugiadas y Migradas.
- Mauricio Pinto Pinto, Coordinador área de sensibilización, acción comunitaria, incidencia y comunicación de València Acull.
- Elisa Ceccaci Ossa, Técnica de programas en Save the Children. Programa Impulsa.
- Miquel Ruiz Collados, President de la cooperativa d'ensenyament Mestres de la Creu de Mislata, entitat titular d'escola "Santa Creu".

3. PANEL 1: PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

Este primer bloque analizó el papel de las políticas públicas, el marco académico universitario y las metodologías pedagógicas como ejes estructurales para garantizar el derecho a la educación y la inclusión de las personas refugiadas en la C. Valenciana.

Pedro Carceller, en representación de la Generalitat Valenciana, destacó que las políticas públicas en materia de Educación para el Desarrollo (EpD) tienen como línea fundamental el fomento y la garantía de los derechos humanos dentro del territorio. En este sentido, se subrayó la importancia de generar espacios de acogida que sean genuinamente inclusivos para todas las personas recién llegadas, promoviendo procesos que pongan el foco en la convivencia, el encuentro entre personas y la articulación de respuestas eficaces ante el desplazamiento forzado. Se insistió en la necesidad de preparar a la sociedad de acogida para favorecer relaciones basadas en el conocimiento mutuo, el respeto y la corresponsabilidad

En este marco normativo se puso en valor la Estrategia EnDavant, una herramienta construida de manera participativa junto a los sectores educativo, organizativo e institucional que redefine la mirada hacia las personas refugiadas y desplazadas, considerándolas sujetos de posibilidades y de pleno derecho, cuya dignidad debe ser preservada mediante el acceso efectivo al disfrute de sus libertades fundamentales.

Complementando este enfoque, María de Zabala, de ACNUR España, enfatizó que el acceso al sistema educativo constituye un elemento crítico para la reconstrucción de los proyectos vitales de la población desplazada y un componente indispensable en la consecución de soluciones duraderas a largo plazo. No obstante, el diagnóstico global revela desafíos estructurales alarmantes, marcados por la continuidad de conflictos armados que interrumpen la educación de las infancias, dejando fuera de las aulas al 46% de los 12,4 millones de personas refugiadas en edad escolar.

Esta brecha de escolarización respecto a la población global se agudiza drásticamente a medida que se avanza hacia la educación secundaria y superior, siendo las niñas y las mujeres jóvenes quienes sufren el mayor impacto en términos de desescolarización y abandono temprano. Ante esta realidad, se subrayó que garantizar la educación debe entenderse como una prioridad política, humanitaria y de protección, ya que contribuye a prevenir situaciones de vulnerabilidad como el trabajo infantil, los matrimonios tempranos o la exclusión social. Asimismo, se destacó la importancia de incorporar apoyo psicosocial y atención a la salud mental dentro de los procesos educativos, especialmente para niños, niñas y adolescentes que han experimentado situaciones traumáticas derivadas del desplazamiento forzado.

Por su parte, la contribución de Ana Sales, del Grupo de Trabajo de la CRUE, abordó la respuesta de la educación superior a través de sus pilares fundamentales de docencia, investigación y transferencia. En el ámbito docente, se subrayó el impacto del Plan Refugio, desarrollado en colaboración con la Generalitat Valenciana, el cual facilita becas para estudiantes en situación de desplazamiento, funcionando además como una vía complementaria y segura para la obtención de visados hacia España e

incorporando procesos de mentoría que ofrecen un acompañamiento integral tanto en la incorporación académica como en la posterior inserción sociolaboral.

Asimismo, se identificó que las áreas de investigación y transferencia son esenciales para conectar el conocimiento académico con la ciudadanía y compartir realidades con la población local, asumiendo la universidad la responsabilidad de liderar la generación de narrativas fundamentadas que permitan monitorear, manejar y reorientar de forma efectiva los discursos xenófobos y discriminatorios. Entre los principales retos identificados se señaló la necesidad de avanzar en mecanismos más ágiles para el reconocimiento de estudios, titulaciones y competencias previas de las personas refugiadas, evitando que las dificultades documentales interrumpan sus trayectorias académicas y profesionales.

Finalmente, la Vicent Gonzálvez Pérez, en representación de la Cátedra UNESCO-UV EGM, expuso propuestas metodológicas concretas aplicadas en la educación superior, específicamente a través de proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) en los grados de Pedagogía y Educación Social, partiendo de la premisa de que el conocimiento se produce a partir de la acción y la experiencia vivencial. Este modelo permite que el alumnado universitario, tras una fase formativa inicial en las aulas, se traslade a centros de educación primaria y secundaria para promover de forma práctica el mensaje de la dignidad humana, logrando un aprendizaje vivencial inmediato que conecta los conceptos teóricos con la realidad social. Destacó además la necesidad de reforzar la educación mediática y el pensamiento crítico como herramientas fundamentales para combatir la desinformación y los discursos de odio difundidos a través de los entornos digitales.

4. PANEL 2: ORGANIZACIONES SOCIALES

El segundo bloque de la jornada se centró en la experiencia de las organizaciones sociales y las entidades del tercer sector, visibilizando la experiencia de la intervención directa, el acompañamiento comunitario y la defensa de los derechos humanos en los procesos de acogida e inclusión en la C.Valenciana.

En primer lugar, Leonora Castaño expuso la labor de incidencia y acercamiento institucional de La Colectiva de Mujeres Exiliadas, Refugiadas y Migradas para responder a las necesidades específicas de las mujeres en movilidad humana, orientada a la superación de las brechas de desigualdad y la garantía de una vida digna en la sociedad de acogida. Desde una postura proactiva, la entidad subrayó el valor de la recuperación de los saberes comunitarios y ancestrales como herramientas de participación, organización y fortalecimiento del tejido asociativo. Asimismo, destacó la relevancia de la participación directa de las personas refugiadas en universidades, espacios educativos e instituciones, permitiendo sensibilizar a la ciudadanía desde las

experiencias vividas y contribuyendo a una comprensión más profunda de las realidades del exilio y la persecución, desde un enfoque de derechos humanos y género.

La intervención también subrayó el papel central de los cuidados como principio organizador de la acción colectiva, reivindicando el derecho a cuidar y ser cuidados, así como la necesidad de construir comunidades basadas en el acompañamiento mutuo, el respeto a la diversidad, la protección de la vida y el fortalecimiento de las redes de apoyo. Del mismo modo, se puso en valor la importancia del trabajo en alianza con organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, instituciones públicas y universidades para afrontar de manera colectiva los desafíos actuales en materia de derechos humanos, refugio y convivencia.

Por su parte, Mauricio Pinto de València Acull, abordó la urgencia de combatir el estigma social que erróneamente vincula la migración con dinámicas delictivas o problemáticas comunitarias. A través de su experiencia en orientación y s acompañamiento social, la entidad defendió un modelo de atención basado en el desarrollo comunitario, la participación activa, el antirracismo y los enfoques de género y derechos humanos. Este modelo se materializa en la creación de espacios seguros de escucha activa donde las personas pueden narrar sus propias historias y visibilizar su realidad, favoreciendo con ello una interacción colaborativa y un trabajo comunitario real entre la población refugiada y la sociedad de acogida.

Se destacó especialmente el valor de iniciativas que favorecen el encuentro entre la población local y las personas recién llegadas, generando oportunidades para el conocimiento mutuo y la ruptura de estereotipos. Estas experiencias demuestran que la convivencia y la cohesión social se fortalecen cuando las personas participan conjuntamente en la vida comunitaria y son reconocidas como actores activos dentro de ella.

En esta misma línea de intervención integral, Elisa Ceccaci de Save the Children, enfatizó la importancia estratégica del trabajo en red entre las organizaciones sociales para optimizar el impacto de sus acciones. Su aportación se centró en la atención directa a la infancia y la adolescencia a través de proyectos de Educación para la Ciudadanía Global (EpCG) que promueven valores y habilidades sociales desde una pedagogía respetuosa, complementada con atención psicoterapéutica especializada.

La entidad remarcó la necesidad de intervenir de manera integral en la vida de niños, niñas y adolescencias, combinando el refuerzo educativo y las actividades de ocio con un acompañamiento emocional, familiar y comunitario continuo que trascienda el entorno puramente escolar y abarque todos los ámbitos de su desarrollo. A estas metodologías se sumaron las experiencias del tejido de recursos residenciales y de acogida locales, como los desarrollados en el municipio de Mislata, los cuales

complementan este circuito de protección a través de la intervención socioeducativa, reforzando la importancia de que todas las entidades operan de manera coordinada para consolidar el entorno de los menores.

Finalmente, Miquel Ruiz Collados de la cooperativa de enseñanza Santa Creu de Mislata, profundizó sobre el rol de la escuela como una institución que acoge de forma activa y articula respuestas colectivas a las necesidades de la comunidad. Se subrayó que la verdadera inclusión educativa implica lograr que tanto el alumnado como sus familias se sientan parte activa de la comunidad escolar, entendiendo que garantizar el derecho a la educación desde la etapa más temprana es fundamental para permitir que los niños y niñas dejen atrás los factores de vulnerabilidad que han marcado su desplazamiento, fortaleciendo los vínculos de pertenencia y participación.

Asimismo, se defendió que la escuela debe trabajar una conciencia de ciudadanía global desde las primeras etapas educativas, partiendo de la premisa de que los niños, niñas y adolescentes refugiados/as no asisten a las aulas para aprender que son ciudadanos con derechos, sino porque ya lo son y merecen la oportunidad de aprender en igualdad de condiciones. Finalmente, se puso en valor la metodología de ApS aplicado en el entorno comunitario local como una herramienta excepcional que compromete al alumnado con su realidad, teje comunidad, fomenta la corresponsabilidad y genera condiciones favorables para una acogida basada en el crecimiento mutuo, el reconocimiento y la convivencia.

5. CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo de la jornada se recordó de manera reiterada que las cifras del desplazamiento forzado representan historias de vida individuales, marcadas por la pérdida, la resiliencia y la búsqueda de oportunidades para reconstruir proyectos de vida en condiciones de dignidad. Las personas refugiadas fueron presentadas a lo largo del encuentro como sujetos activos de derechos, capacidades y posibilidades, cuya contribución resulta esencial para la construcción de sociedades más inclusivas y cohesionadas.

El encuentro evidenció una profunda convergencia entre la perspectiva institucional y la de las organizaciones sociales, coincidiendo de manera unánime en que la inclusión efectiva de las personas refugiadas y la respuesta al desplazamiento forzado debe articularse a través de una sólida cultura del encuentro, sustentada en la corresponsabilidad colectiva. Los debates demostraron que las respuestas fragmentadas o individualistas resultan insuficientes ante desafíos globales de esta magnitud, por lo que se plantea como prioridad estratégica el fortalecimiento de alianzas estables entre administraciones públicas, instituciones educativas, universidades, organizaciones sociales, comunidades locales y ciudadanía.

En este sentido, se destacó la necesidad de consolidar redes de colaboración, transferencia de conocimiento y aprendizaje compartido que permitan coordinar esfuerzos y generar respuestas integrales. Estas redes, deben situar en el centro la dignidad humana y el acceso efectivo a los derechos fundamentales, reconociendo a las personas refugiadas no únicamente como destinatarias de protección, sino como sujetos activos con capacidades, conocimientos y experiencias valiosas para las sociedades de acogida.

La inclusión requiere fortalecer una cultura de los cuidados que sitúe en el centro el bienestar de las personas, el acompañamiento mutuo y la construcción de comunidades cohesionadas.

Uno de los principales consensos de la jornada fue la importancia de generar espacios de encuentro directo entre las personas refugiadas y la población local. La experiencia demuestra que el contacto humano, la participación comunitaria y el conocimiento mutuo constituyen herramientas fundamentales para desmontar prejuicios, combatir narrativas xenófobas y fortalecer la cohesión social. La inclusión real no se construye únicamente mediante recursos o procedimientos administrativos, sino también a través de relaciones de proximidad basadas en el reconocimiento mutuo y el respeto a la diversidad.

En el ámbito educativo, se concluyó la necesidad de adoptar una pedagogía multiplicadora que permita encontrar soluciones estructurales a los grandes problemas de la acogida mediante la acción comunitaria local y el trabajo en red. Asimismo, las recomendaciones se orientan a trabajar conjuntamente para derribar las barreras estructurales que interrumpen las trayectorias escolares, garantizando la creación de espacios seguros tanto dentro como fuera de las aulas.

Finalmente, se concluye que la clave de las transformaciones sociales más profundas nace de las acciones cotidianas desarrolladas en los espacios comunitarios locales. Escuelas, universidades, asociaciones vecinales, organizaciones sociales, administraciones públicas y ciudadanía comparten la responsabilidad de construir entornos seguros, inclusivos y participativos. Resulta imprescindible reivindicar los espacios de convivencia para hacerle frente a los discursos xenófobos, de odio y de discriminación que fragmentan a las comunidades. Deshacer estas narrativas exige el compromiso de generar discursos fundamentados en la dignidad humana y el respeto a la diversidad, impulsando la construcción de una ciudadanía global activa y corresponsable en la C. Valenciana, capaz de ofrecer entornos de acogida verdaderamente inclusivos, equitativos y libres de discriminación, donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de igualdad, participación y dignidad.

Este documento se ha realizada en el marco del proyecto en agrupada con Enpeu Coop. V. "Refugi 4.7: Contrarrestar la xenofobia en contextos de desplazamiento desde C. Valenciana y Colombia" con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Comité español de ACNUR y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.

UNHCR ACNUR
La Agencia de la ONU para los Refugiados
comité español
delegación c. valenciana

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia

cooperació valenciana

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA



© ACNUR/Charity Nzomo